

Pensar el presente para transformar el futuro en clave Latinoamericana

Aleida Azamar Alonso

Universidad Autónoma Metropolitana, México

La globalización ha representado uno de los procesos más complejos, contradictorios y determinantes para América Latina en las últimas décadas. Lejos de constituir una fase neutra del desarrollo histórico en nuestra región, se ha materializado como una reorganización profunda del orden económico, político, ecológico y simbólico, que modifica no solo las estructuras productivas, sino también los vínculos sociales, las subjetividades y los sentidos de pertenencia.



des/acuerdos globales presenta noticias y artículos de opinión sobre la temática de la globalización relevantes para prácticas y análisis en América Latina.

Publicado por el OBSERVATORIO LATINO AMERICANO de la GLOBALIZACIÓN (CEDIB - OLCA - CLAES).

Y es que Latinoamérica, en tanto región históricamente subordinada dentro de la economía-mundo capitalista, ha sido particularmente vulnerable a los efectos de esta dinámica global desplegada en nombre del libre mercado, la modernización y el progreso. Esa globalización, en lugar de cumplir con las promesas de desarrollo económico, reducción de la pobreza y fortalecimiento democrático con la que se impulsó desde vacíos discursos políticos, ha acentuado las desigualdades preexistentes, profundizando la dependencia estructural de los mercados internacionales y debilitando las bases de soberanía política, económica y ecológica de los Estados y los pueblos latinoamericanos.

El fenómeno globalizador en la región no puede entenderse de forma homogénea o lineal, pues ha asumido múltiples formas, adaptándose a las condiciones específicas de cada país, pero manteniendo ciertas constantes que evidencian un patrón común de desposesión y reconfiguración funcional a los intereses del capital transnacional.

Entre las características más notorias se encuentra el afianzamiento de lo que aquí denomino “modelo extractivista”, entendido no como un plan monolítico, sino como un conjunto de prácticas, políticas y arreglos institucionales que privilegian la extracción intensiva de bienes naturales como vía principal de inserción internacional.

Lejos de diversificar sus economías o promover cadenas de valor propias, han profundizado su especialización en la exportación de materias primas (minerales, petróleo, gas, productos agroindustriales y bienes naturales en general), bajo condiciones extremadamente ventajosas para el capital privado extranjero y/o nacional y en detrimento de las poblaciones locales. Esta tendencia no es una desviación o un efecto colateral, sino la expresión directa de una forma de globalización que articula el capital internacional con élites nacionales mediante alianzas que favorecen el despojo territorial, la desregulación ambiental y la criminalización de las resistencias sociales.

En este contexto, las políticas de liberalización comercial y los ajustes estructurales auspiciados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) durante las décadas de 1980 y 1990 sentaron las bases para un viraje extractivista que, en América del Sur, se reconfiguró a partir de 2006, cuando gobiernos como los de Argentina, Uruguay y Brasil cancelaron sus deudas con el FMI y desplazaron su financiamiento hacia entidades regionales como la CAF o el BNDES, e incluso hacia la banca china. Desde entonces, el impulso provino menos de nuevas privatizaciones y más de una promoción estatal activa articulada mediante empresas públicas, alianzas público-privadas y generosos incentivos fiscales que profundizaron la especialización primaria. Si bien este giro estatal presenta matices entre países —y es más reciente en México y Centroamérica—, los tratados de libre comercio y los acuerdos de inversión continúan funcionando como marcos jurídicos que blindan los derechos de los inversionistas y limitan las capacidades de regulación, planificación y protección de derechos colectivos. De esta forma, los Estados permanecen expuestos a dinámicas transnacionales que privilegian la acumulación de capital sobre los territorios y las comunidades que los habitan.

Los efectos de este proceso han sido devastadores en múltiples niveles, pues en términos sociales, han contribuido a una creciente polarización social, consolidando enclaves de riqueza en manos de una minoría y ampliando los cinturones de pobreza y precariedad tanto en zonas rurales como urbanas. La deslocalización de empleos industriales, la precarización del trabajo y la expansión del sector informal son algunas de sus manifestaciones más visibles. Además, se han erosionado las condiciones para la reproducción social de comunidades enteras, particularmente aquellas que dependen de sus territorios y bienes comunes para la subsistencia, como pueblos indígenas, comunidades campesinas o pesqueras. Estas poblaciones no solo enfrentan la pérdida material de sus medios de vida, sino también la fragmentación de sus tejidos sociales y la pérdida de referentes culturales, en un contexto en el que la lógica de la acumulación se impone sobre los vínculos comunitarios y ecológicos.

Desde una perspectiva “ambiental y verde” se ha promovido una intensificación sin precedentes de la extracción y transformación de la naturaleza, generando una crisis ecológica de alcance regional y global. Nuestra región —uno de los territorios con mayor biodiversidad y riqueza en bienes naturales del planeta— ha sido blanco de múltiples formas de saqueo ambiental con consecuencias gravísimas para la vida. El avance de la frontera minera, la expansión de los monocultivos, la deforestación, el acaparamiento de agua y los megaproyectos de infraestructura son manifestaciones de lo que David Harvey denomina acumulación por desposesión: procesos donde se transfieren tierra, trabajo y bienes comunes hacia circuitos de valorización de capital. En el Sur Global, esta dinámica no depende exclusivamente de privatizaciones clásicas ni del control directo de potencias imperiales. Empresas estatales como PEMEX o Yacimientos de Litio Bolivianos, junto con alianzas público-privadas y cadenas de suministro transnacionales, funcionan como vehículos de desposesión al priorizar la rentabilidad extractiva sobre los derechos territoriales y los límites eco-sistémicos. La desprotección normativa, el debilitamiento institucional y la violencia contra quienes defienden los territorios convierten a América Latina en una de las regiones más peligrosas para el activismo ambiental.

Además, en términos culturales y simbólicos, se ha promovido un modelo homogéneo de vida basado en el consumo ilimitado, la competencia individualista y la subordinación a valores ajenos a las cosmovisiones locales, ya que este fenómeno ha tenido un impacto profundo en la construcción de identidades, en la pérdida de lenguas y conocimientos ancestrales, así como en la imposición de formas de vida que disocian al ser humano de su entorno natural; de esta forma no solo se capturan territorios físicos, sino también la mente de las personas, al promover una visión única del desarrollo y del progreso que invisibiliza otras formas de existencia, otras racionalidades y otras maneras de habitar el mundo.

Frente a este panorama, resulta necesario desarrollar respuestas colectivas, críticas y propositivas que permitan enfrentar los efectos adversos mencionados y, sobre todo, imaginar formas alternativas de organización social, económica y política. Esta tarea implica superar las visiones que entienden la globalización como un proceso inevitable o neutral y asumirla como un campo de disputa, en el que es posible resistir, transformar y construir caminos propios desde los pueblos y los territorios, por lo que es fundamental recuperar la capacidad de análisis autónomo, fortalecer las organizaciones sociales, construir alianzas regionales y generar conocimiento situado que permita comprender las dinámicas globales desde una perspectiva latinoamericana.



La urgencia de enfrentar esta situación no responde únicamente a la necesidad de revertir los daños causados, sino a la posibilidad de construir un horizonte distinto, donde el bienestar de los pueblos y la sostenibilidad de la vida estén por encima de los intereses del mercado.

Todo esto requiere dismantlar los marcos hegemónicos que legitiman la globalización neoliberal, tales como el mito del crecimiento económico ilimitado, la eficiencia del libre mercado o la inevitabilidad de la modernización tecnológica.

Al mismo tiempo, demanda visibilizar y fortalecer las múltiples experiencias de resistencia y re-existencia que florecen en toda la región, desde economías solidarias, sistemas alimentarios agroecológicos, procesos de autonomía territorial, hasta pedagogías comunitarias y formas de gobernanza participativa.

En este sentido, el conocimiento se convierte en un campo estratégico de lucha, pues quienes producen, legitiman y difunden sus saberes tienen un rol determinante en la configuración del sentido común y en la definición de lo posible. Por ello, resulta indispensable construir espacios de producción de conocimiento crítico, plural y comprometido con la transformación social. Esta necesidad no puede ser suplida únicamente desde las universidades o los centros de investigación tradicionales, muchos de los cuales han sido cooptados por intereses empresariales o limitados por estructuras burocráticas, por lo que se requieren espacios autónomos, flexibles y capaces de articularse con las luchas sociales, que permitan comprender la complejidad del presente sin renunciar a la posibilidad de su transformación.

Es en este marco que la existencia de organismos como el Observatorio Latinoamericano de la Globalización cobra un sentido profundo, pues no se trata de un simple centro de monitoreo o recopilación de datos, sino un espacio político-epistémico que articula saberes, experiencias y análisis desde una perspectiva crítica, situada y comprometida con los pueblos de América Latina, que además cumple la función de desentrañar las lógicas del poder global, de sistematizar sus impactos locales y de proponer horizontes de sentido que no estén anclados en los paradigmas hegemónicos.

A diferencia de los think tanks tradicionales que operan bajo la lógica del mercado del conocimiento y responden a los intereses de grandes corporaciones o gobiernos, estos observatorios se sitúan desde una ética del cuidado, la justicia y la autonomía. Su relevancia no radica solamente en los datos que ofrecen, sino en la forma en que los construyen, con quiénes los construyen y para qué fines. Al trabajar en red con organizaciones sociales, comunidades afectadas, colectivos de investigación y movimientos populares, estos espacios logran articular múltiples niveles de conocimiento, desde la experiencia territorial hasta el análisis macroestructural, generando diagnósticos integrales y propuestas contextualizadas.

Su existencia permite disputar el sentido común desde una narrativa que no se somete a los dictados del poder, sino que se alimenta de las resistencias, de las prácticas de vida digna y de los saberes ancestrales. En un contexto en el que la información circula de manera vertiginosa, pero muchas veces fragmentada o manipulada, el trabajo de estos observatorios contribuye a construir relatos coherentes, consistentes y transformadores, lo que es particularmente relevante en momentos de crisis, donde las élites políticas y económicas buscan imponer soluciones técnicas a problemas estructurales, invisibilizando sus causas y responsables.

Por otro lado, estos espacios también cumplen un papel pedagógico esencial. Al producir materiales accesibles, organizar encuentros, sistematizar experiencias y acompañar procesos de formación, contribuyen a fortalecer la capacidad crítica de las organizaciones y a democratizar el acceso al conocimiento. No se trata únicamente de analizar el mundo, sino de intervenir en él de manera informada, respetuosa y colectiva.

De esta forma, la aportación del Observatorio se vuelve aún más relevante en un contexto internacional marcado por el recrudecimiento del autoritarismo, el militarismo y la competencia geopolítica entre potencias. La redefinición de las estrategias globales de control, el avance de nuevas formas de

colonialismo digital y energético, así como la creciente financiarización de todos los aspectos de la vida, exige una lectura aguda y contextualizada.

La existencia de estos esfuerzos permite imaginar una realidad regional que no se limita a resistir, sino que apuesta por construir, que desde su diversidad y complejidad, se piensa a sí misma, se interroga y se proyecta más allá de las fronteras impuestas. En esta tarea, el conocimiento es una herramienta fundamental, pero también lo es la articulación política, la solidaridad regional y el compromiso ético con la vida. La globalización, tal como se nos ha impuesto, no es el único camino, pues existen otros mundos posibles y su construcción pasa, necesariamente, por espacios como este.

Aleida Azamar Alonso es profesora investigadora, en la Universidad Autónoma Metropolitana, México.
Contacto [gioconda15\(a\)gmail.com](mailto:gioconda15(a)gmail.com)

Las imágenes son secciones de un dibujo de Mariano Vior (en Clarín, Buenos Aires).

des/acuerdos globales ofrece artículos de opinión, breves, sobre acontecimientos globales y sus impactos, desde una perspectiva independiente, crítica y rigurosa enraizada en América Latina.

El contenido, las opiniones y las informaciones son de responsabilidad del autor y no comprometen a las instituciones.

Disponible en www.globalizacion.org/informeglobal

El OBSERVATORIO LATINO AMERICANO de la GLOBALIZACIÓN es una iniciativa de **CEDIB** (Centro de Documentación e Información Bolivia), **OLCA** (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales) y **CLAES** (Centro Latino Americano de Ecología Social).

Su propósito es abordar los procesos globales que afectan el continente, sus sociedades y ambientes. Sistematiza y organiza información, acompañado a organizaciones ciudadanas, comprometido con las necesidades y coyunturas de la región.

Escríbanos: observatorio@globalizacion.org

Licencia Creative Commons CC BY-NC-SA. Se permite la reproducción del documento siempre que se cite la fuente.

Publicado en Montevideo (Uruguay).

